



Democracia electoral

Como una profesión de fe, politólogos y medios de comunicación proclaman que el voto confiere a los ciudadanos el poder para cambiar el gobierno. En México, dicho aserto aún no tiene validez. El sufragio efectivo es un ejercicio reciente para la ciudadanía, luego del derrumbe de la prolongada hegemonía del partido de Estado que en los hechos era el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 2000 la alternancia electoral en la Presidencia de la República permitió el arribo del panista Vicente Fox, quien pronto defraudó el clamor popular de cambio para profundizar el proyecto económico implantado en los sexenios priistas previos. Desde entonces, se presume que México constituye una sociedad democrática. Empero, las elecciones de 2006 estuvieron marcadas fuertemente por el fantasma del fraude electoral, puesto que desde la cúspide del poder se maniobró para obstruir el triunfo electoral del izquierdista Andrés Manuel López Obrador —ampliamente vilipendiado por analistas oficiosos—, de la Coalición por el Bien de Todos y se concedió el triunfo al derechista Felipe Calderón. Esta maniobra contó con el respaldo de los poderes fácticos, personificados por los monopolios y oligopolios, que hicieron las veces de patrocinadores de la guerra de odio en contra de los políticos que representaban un proyecto de cambio, así fuera moderado, y no radical, como era el caso.

La primera impresión que deja este episodio nebuloso de la vida nacional es que el Presidente de la República asume el cargo sin legitimidad social, pero con el respaldo irrestricto de los poderes fácticos, que son los principales detentadores del poder en México, y el apuntalamiento evidente de la fuerza pública y castrense. Tal escenario no puede sino poner en duda la existencia de un régimen democrático en el país. Sin embargo, la principal lección de menudo acontecimiento es que las élites económicas, sociales y

políticas no están dispuestas a conceder poder al pueblo ni a promover el cambio del modelo económico que vulnera sistemáticamente al Estado social y al sistema de subsistencia, a la vez que concede enormes privilegios a las grandes corporaciones interesadas, a su vez, en amplificar sus ganancias.

Para el sistema de poder vigente, el voto no es un instrumento ciudadano concebido para cambiar el régimen político ni el modelo económico, simplemente es un dispositivo que convalida a la clase política, por lo que la tarea primordial de los partidos políticos es seducir, a como dé lugar, a la masa de votantes potenciales. Poco tiempo se dedica al estudio de los graves problemas nacionales, regionales y locales y a sus soluciones de fondo, que incluyen, por supuesto, la apertura de canales de participación directa de la sociedad.

En el ámbito federal, la alternancia electoral, que fue calificada con premura como “transición política”, llegó tardíamente, porque la verdadera transición aconteció dentro del Estado, bajo la tutela del PRI, con el cambio del modelo económico nacional y la consecuente imposición del neoliberalismo. Con el arribo al poder de políticos neoconservadores, como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se diseñó e implementó la contrarrevolución económica, social y política.

El posterior ascenso del Partido Acción Nacional (PAN), y su continuidad discutible, no representa mayor problema para el poder; al contrario, contribuye a profundizar el neoliberalismo bajo los auspicios de la inefable coalición motejada como PRIAN. Bajo este modelo económico se impone una política pragmática y utilitarista que sigue los lineamientos de las políticas de ajuste estructural, machaconamente referidas como “las reformas que el país necesita”, léase privatización, flexibilización laboral y demás. Amplios sectores de centro izquierda y de izquierda han sucumbido a esta línea programática que tiene como consigna negociar todo, a cambio de preservar beneficios y posiciones. A esto se le llama política responsable, construcción de consensos o suma de voluntades.

En los ámbitos locales, el proceso de alternancia electoral ha permitido que los partidos políticos grandes se dividan el territorio nacional, en una modalidad que trastoca las fuerzas políticas en una especie de franquicias electorales bajo el control de los gobernadores, que supeditan a los otros poderes locales. Estos gobiernos aplican o reproducen localmente las directrices del modelo neoliberal, por convicción propia o aduciendo que no tienen margen de maniobra. Los gobiernos emanados de los grandes partidos (PRI, PAN y PRD) ejercen sus funciones bajo pautas muy similares, sin marcar grandes diferencias entre ellos, porque están más interesados en la preservación y control territorial de su poder —como si fuesen “plazas”, según el lenguaje mafioso— que en construir políticas públicas alternativas. Por ello, el control político territorializado reviste ropajes de corte presidencialista, neocorporativo o, de plano, caciquil. En este renglón, un punto crítico fundamental para la izquierda electoral es que no ha logrado construir un proyecto nacional alternativo, sin contar el hecho de que se está desarticulando.

Los gobiernos locales —estatales y municipales—, no han tenido la capacidad política para implementar alternativas de desarrollo, simplemente se han plegado a los designios programáticos de la federación: administrar la pobreza, maquilizar la economía, malbaratar el territorio y exportar gente. Por añadidura, la mayoría de los gobernantes usa el poder como un trampolín político. En presencia de la alternancia electoral, se advierte una línea de continuidad que sólo es matizada por diferencias estilísticas en la aplicación de programas de obra pública, de conformidad a las asignaciones presupuestales federales, o al arraigamiento de inversión privada, salpimentada con los destellos personales de los gobernantes y sus alocuciones autorreferenciales. En todo caso, se constata que desde el ámbito del poder local no se han generado alternativas de desarrollo para beneficio colectivo. El sentido del voto popular aún no ha impactado como para que, desde arriba, se geste el anhelado cambio.

La designación de candidaturas por los partidos políticos con registro oficial obedece, primordialmente, a la cercanía de los postulantes con las cúpulas o burocracias partidarias y a los gobernantes en turno, nacionales y locales, y se respaldan con dineros públicos y privados, incluso sin las cor-tapisas de los topes financieros de campaña. Los mecanismos de la democracia formal, reducida a lo electoral, cierran el acceso a una genuina representatividad y a la construcción del poder popular. En esas condiciones, se cierra la puerta para que líderes sociales genuinos, ciudadanos competentes y calificados, y representantes populares legítimos contiendan por puestos de representación política. De este modo, es improbable que, por ejemplo, un líder sindical democrático, un representante vecinal o comunitario, un científico productivo, un defensor de derechos humanos, o bien, personajes relevantes emanados de diversos sectores de la sociedad, pero ajenos a las determinaciones partidarias, figuren en las boletas electorales. En consecuencia, la socorrida idea de que los gobiernos y congresos, en sus distintos niveles, están conformados por los mejores hombres y mujeres no deja de ser, al final de cuentas, más que un candoroso autoelogio.

Para agenciarse la votación mayoritaria, los partidos con vínculos gubernamentales y empresariales movilizan enormes recursos dinerarios que se traducen en una cauda de bienes electorales, es decir, artículos que los candidatos obsequian a la población como paliativos de la pobreza: despensas, bultos de cemento y apoyos económicos. En otra categoría se agregan piezas que difunden las insignias de la campaña y que pronto terminan como basura: volantes, calcomanías, camisetas, gorras, pendones, mantas, pintas, etcétera. También se financian comilonas, bailes populares, encuentros deportivos, corridas de toros, entre otras actividades de convivencia para fundamentar el arrastre popular del candidato. Además se organizan grupos de animación, promotores del voto y asociaciones fantasmagóricas que incentivan, movilizan y acarrear a la población. Los medios de comunicación, los grandes beneficiarios de las partidas presupuestales electorales, se “fro-

tan las manos”, porque “hacen su agosto” en las contiendas mediante la venta de espacios publicitarios, que también incluyen aparentes entrevistas desinteresadas, y que terminan aturdiendo a la ciudadanía. Los gobiernos realizan obras de último momento e inauguraciones vertiginosas, además de que movilizan los últimos apoyos orientados a sectores populares catalogados en la zona gris de votantes indecisos. Los candidatos presumen sonrisas y poses retocadas que pretenden transmitir la imagen de una persona amistosa y confiable, como si se tratase de una mercancía en venta con su marca comercial y un eslogan publicitario machacón. La propaganda oficial llama a votar a la ciudadanía con spots deslavados que arengan despropósitos. En este periodo, florece una pujante industria electoral. El dinero privado, público y gubernamental (que también es público) aparece, entonces, como fundamento de la contienda política y acicate del voto popular. Los dineros ejercen sin demoras su esperado efecto multiplicador.

Ante la embestida de la crisis civilizatoria y de la propia crisis del sistema político, surge, más que nunca, la necesidad de recuperar colectivamente el sentido de la política como una actividad que le confiere poder al pueblo para construir el bien común social, y no sólo como un instrumento de validación de la clase política mediante el voto. Por lo mismo, los movimientos sociales, los ciudadanos organizados, los sectores pobres y marginados, y los promotores de alternativas, no se pueden fiar del voto como único instrumento legal y no violento para la transformación social.

El llamado abstracto a ejercer el voto, porque constituye un valor de la democracia o una llave para cambiar gobiernos, es todavía una proclama de buenas intenciones. La endeble democracia mexicana, de por sí reducida al plano electoral, está controlada por los llamados poderes fácticos, es decir, una pléyade de monopolios, gobernadores, partidos, sindicatos y crimen organizado que se disputan el poder político (cargos y dineros públicos) y el poder económico (concesiones y negocios).

La democracia electoral se hunde en una degradación sistémica cuando, movidos por aquellos afanes, los actores pervierten sus prácticas: los gobernantes, partidos y candidatos usan dineros públicos y privados a manos llenas para la compraventa del voto; los medios de comunicación comercializan, manipulan y censuran sus espacios informativos; la ciudadanía accede complaciente a dádivas y pachangas; y las autoridades electorales permanecen como espectadoras. En última instancia, la distribución de cotos de poder actúa como la fuerza gravitacional de la política, y no la búsqueda del bien común social.

En el ámbito nacional se perfila un triunfo priista apabullante en los comicios por venir. La explicación es sencilla: los gobernadores priistas, fieles a su cultura política, actúan como caciques, pero más importante aún para entender esta avalancha, es el desastre y descrédito del gobierno federal panista y la inoperancia e indefinición del perredismo en su vertiente partidaria y gubernamental. La desilusión ciudadana se decanta por la peor vía de escape: el retorno del ogro filantrópico recargado.

La orientación política de los gobiernos locales en disputa, más allá de sus colores partidarios y señales discursivas, se caracteriza por tres elementos: neoliberalismo (otorgamiento de facilidades, apoyos y recursos a intereses corporativos del capital); asistencialismo (otorgamiento de apoyos mínimos a población depauperada y clientelismo electoral), y estatolatría (exaltación de la imagen personal del gobernante).

Las posibilidades de un cambio en la configuración política de los gobiernos locales, más allá de los candidatos y partidos, exige la construcción de una cultura política democrática, la promoción del poder popular y la reorientación del proyecto de desarrollo local vinculado a una apuesta posneoliberal. Empero, los partidos del continuismo neoliberal no están interesados en ese propósito, pues asumen que la modernización neoliberal, depredadora y excluyente, es un signo de los tiempos, una fuerza a la que una región sumergida en la migración compulsiva no puede sustraerse ni un

minuto. Esta visión conservadora justifica alianzas políticas pragmáticas que anteponen la distribución de cotos de poder en lugar del diseño programático del cambio.

En el contexto nacional existen dos grandes proyectos en disputa: 1) El proyecto hegemónico de corte neoliberal impulsado por el PAN gobernante en coalición con el PRI y amplios sectores del PRD. La alternancia electoral permitió el arribo al poder del PAN, cerró las puertas a la izquierda electoral, pero mantuvo y profundizó el proyecto neoliberal. 2) Por el contrario, el proyecto alternativo, de sustrato popular-democrático, es postulado por una coalición de izquierda, donde participan algunos sectores del PRD, PT y Convergencia. En apariencia, este proyecto es producto del empuje y determinación de una fuerza social en movimiento que anhela un cambio verdadero, pero que a menudo es traicionado por las burocracias de los partidos que formalmente ostentan su representación. El debate político, empero, está inmerso en los lodos de la partidocracia, en los intereses inmediatos de la clase política, no en el debate sobre el desarrollo nacional.

Dependencia de las remesas

De manera concomitante al incremento de las migraciones internacionales, sobre todo de índole laboral con trayectoria de sur a norte o del mundo periférico y subdesarrollado al central y desarrollado, las remesas de dinero que envían los migrantes a sus dependientes económicos radicados en los lugares de origen registran un crecimiento espectacular. Los organismos internacionales reportan que la cuantía de estos recursos duplica la inversión extranjera directa y la llamada ayuda exterior para el desarrollo. Más aún, los analistas estiman que en la contabilidad internacional de las remesas se deja de lado los envíos informales, que, según se estima, se pueden